

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS CUYA VENTA
ESTÁ PROHIBIDA EN EL PAÍS DE ORIGEN

Nota documental de la Secretaría

1. La presente nota se ha preparado atendiendo a la solicitud del Subcomité de que la Secretaría facilitara información sobre los antecedentes y la historia de esa cuestión en el GATT y los hechos ocurridos recientemente en esa esfera tanto en el GATT como fuera de él. En ella se reseñan también los trabajos realizados en el marco de otros instrumentos internacionales conexos y en el Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional que puedan tener consecuencias para cualquier labor futura en esa esfera.

Historia de la labor realizada en el GATT sobre la cuestión de las exportaciones de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen¹

2. El tema de las "exportaciones de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen" fue planteado por primera vez por Nigeria y Sri Lanka durante la labor preparatoria para la Reunión Ministerial de 1982 (documento PREP.COM/W/16). Se incluyó en el programa de trabajo del GATT en la Reunión Ministerial de 1982, como consecuencia de la preocupación expresada por algunos países en desarrollo ante la creciente tendencia por parte de las industrias y empresas a exportar productos cuya venta en el mercado interno estaba prohibida o sometida a restricciones rigurosas con el fin de proteger la salud y la seguridad humanas o el medio ambiente. En la Declaración Ministerial adoptada en el trigésimo octavo período de sesiones a nivel ministerial de las PARTES CONTRATANTES, se decía, a ese respecto, lo siguiente:

"Las PARTES CONTRATANTES deciden que las partes contratantes notifiquen al GATT, en la mayor medida en que sea factible, las mercancías que produzcan y exporten pero cuya venta en el mercado interno esté prohibida por sus autoridades nacionales por motivos de salud y seguridad humana. En su período de sesiones de 1984, las PARTES CONTRATANTES considerarán, a la luz de la experiencia adquirida mediante este procedimiento de notificación, la necesidad de estudiar los problemas de interés para el GATT relacionados con las exportaciones de mercancías cuya venta esté prohibida en el país de origen y las medidas apropiadas para resolver esos problemas."²

¹Buena parte de esa información se basa en los documentos del GATT L/6467, de 2 de febrero de 1989, y L/5907, de 22 de noviembre de 1985.

²Declaración Ministerial adoptada el 28 de noviembre de 1982, IBDD 29S/9.

3. Esa información fue facilitada con arreglo al modelo de notificación propuesto por la Secretaría.³ En 1984 se habían recibido 23 notificaciones, que se distribuyeron en la serie de documentos DPG/NOTIF.83.1 - DPG/NOTIF.84.5. Se constató que las notificaciones recibidas no constituían una base de datos suficiente para determinar cómo podían estudiarse los problemas de interés para el GATT en esa esfera. Por consiguiente, en 1984, en una Decisión sobre las exportaciones de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen adoptada en el cuadragésimo período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES (L/5759/Rev.1), se cursó una segunda invitación a que se hiciesen notificaciones. En esa Decisión se pidió que se remitiera un proyecto de aerograma⁴ en el que se clarificaran y ampliaran los tipos de medidas que debían notificarse. En el aerograma se señalaba lo siguiente:

"Mientras que el modelo de notificación tenía por finalidad abarcar todas las clases de mercancías prohibidas que produzcan y exporten las partes contratantes, las notificaciones hechas únicamente se referían a la no existencia de tales prácticas. Así pues, la información facilitada hasta el momento no parece constituir una base de datos suficiente para que las partes contratantes consideren la necesidad de estudiar los problemas de interés para el GATT relacionados con las exportaciones de mercancías cuya venta esté prohibida en el país de origen.

Con el fin de ampliar la base de datos, se ruega a todas las partes contratantes que respondan lo antes posible a la invitación a ellas dirigida en el aerograma GATT/AIR/1885 de que se notifiquen en la mayor medida en que sea factible las mercancías que produzcan y exporten pero cuya venta en el mercado interno esté prohibida por sus autoridades nacionales por motivos de salud y seguridad humana. A ese respecto, se sugiere que en la mayor medida en que sea factible las partes contratantes comuniquen a la Secretaría cualquier información pertinente que le permita preparar, para mediados de 1985, la documentación básica destinada a facilitar la discusión de la cuestión. Esa documentación podría también abarcar la labor que se realiza en otras organizaciones."⁵

4. Hacia mediados de 1985 se habían recibido otras cinco notificaciones. Además, la Secretaría del GATT preparó una nota documental sobre las actividades realizadas por otras organizaciones en esferas conexas.⁶ Esa nota fue el primer intento de reseñar las actividades de otras organizaciones en materia de intercambio de información sobre el comercio de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen. La nota fue actualizada en varias ocasiones a lo largo del período de examen de ese tema.⁷ En julio de 1985 se celebraron consultas con las delegaciones interesadas sobre la base de la información facilitada en esos documentos. Se envió un nuevo aerograma en el que se sugirió que la presentación de información similar por todas las partes contratantes facilitaría la comprensión de las cuestiones planteadas. Se recibieron algunas otras notificaciones, y en noviembre de 1985 se celebró una nueva consulta con las delegaciones interesadas.

³El modelo se propuso en GATT/AIR/1885.

⁴GATT/AIR/2087, de 4 de diciembre de 1984.

⁵*Id.*

⁶DPG/W/1, de 6 de mayo de 1985.

⁷Véanse los documentos L/6459, de 30 de enero de 1989; L/6459/Rev.1, de 24 de noviembre de 1989, y L/6459/Rev.1/Corr.1, de 30 de marzo de 1990; DPG/W/4, de 11 de octubre de 1989; DPG/W/4/Rev.1, de 24 de noviembre de 1989, y DPG/W/4/Rev.1/Corr.1, de 30 de marzo de 1990.

5. Por aquellas fechas, la Secretaría ya había podido apreciar por las consultas celebradas que se reconocía en general que la exportación de mercancías cuya venta no estaba autorizada en un mercado interno determinado por razones de salud o seguridad era una cuestión que interesaba a las partes contratantes. En un documento de la Secretaría en el que se resumían los resultados de las consultas, se señaló lo siguiente:

"... Los debates han arrojado luz sobre problemas relativos a la definición de las mercancías "cuya venta está prohibida en el país de origen" a la vista de las prácticas de determinadas partes contratantes, que pueden entrañar una certificación positiva más que una prohibición o restricción. La información proporcionada ... sobre las correspondientes disposiciones legislativas ha servido para aclarar las prácticas seguidas en esos países en cuanto a la producción y exportación de tales mercancías, prácticas que varían considerablemente de un caso a otro. También se ha planteado la cuestión de determinar hasta qué punto debe recaer en las autoridades del país exportador o del país importador la principal responsabilidad en cuanto a la adopción de medidas para restringir el comercio de esos productos. En ese contexto, se suscitaron las cuestiones del suministro de suficiente información a los países importadores y de la capacidad de éstos para formular o aplicar criterios adecuados con el fin de permitir o de prohibir la venta de las mercancías importadas. Varias delegaciones han señalado la complejidad de estas cuestiones y los problemas de orden práctico que plantea la regulación de ese comercio.

... Algunas delegaciones han mencionado las disposiciones del párrafo b) del artículo XX del Acuerdo General. Se ha sugerido que los procedimientos de notificación previstos en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio pueden servir de base para mejorar la corriente de información y de orientación en cuanto a las medidas que habrían de adoptar los países exportadores o importadores. Se ha suscitado también a este respecto la cuestión de la extraterritorialidad de las normas. Se ha mencionado asimismo la posibilidad de que las prohibiciones de exportación por parte de países con normas sobre productos muy estrictas den lugar a una desviación del comercio hacia países exportadores con normas menos estrictas.⁸

6. En 1986, al iniciarse las conversaciones para el lanzamiento de la Ronda Uruguay, el Grupo de Funcionarios Superiores y posteriormente el Comité Preparatorio examinaron la posibilidad de incluir el tema en el programa de las negociaciones. Varios países en desarrollo eran partidarios de hacerlo, pero otros consideraban que la labor en esa esfera debía enmarcarse en las actividades regulares del GATT. Predominó la segunda opinión. Al término del período extraordinario de sesiones de las PARTES CONTRATANTES celebrado en Punta del Este, el Presidente de la Reunión Ministerial, al recomendar la adopción de la Declaración Ministerial sobre la Ronda Uruguay, señaló que "las delegaciones habían planteado ciertas cuestiones sobre las que no era posible por el momento llegar a un consenso para la negociación. Entre esas cuestiones figuraban la exportación de sustancias peligrosas ..."⁹

7. Posteriormente, en noviembre de 1986, en el cuadragésimo segundo período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES, se acordó oficialmente que la labor en esa esfera se realizara en el marco del programa ordinario de trabajo. Se acordó:

"Que las partes contratantes celebren consultas con vistas a establecer directrices para la adopción de medidas con respecto al comercio de mercancías cuya venta esté prohibida en el país de origen, tomando en cuenta los elementos siguientes:

⁸L/5907, de 22 de noviembre de 1985.

⁹Declaración Ministerial sobre la Ronda Uruguay, Declaración de 20 de septiembre de 1986, IBDD 33S/30.

- a) notificación de las leyes y reglamentos pertinentes;
- b) información sobre medidas específicas que limiten o prohíban la venta en el país de origen, las exportaciones o las importaciones de mercancías por razones de salud o de seguridad humanas;
- c) necesidad de mantener estrecho contacto con otros organismos internacionales pertinentes que actúen en esta esfera y de evitar, en la medida posible, la duplicación de la información suministrada en el marco de otros organismos;
- d) procedimientos de consulta entre partes contratantes interesadas en relación con cualquier problema que pueda surgir como resultado de esas medidas;
- e) celebración de exámenes periódicos sobre la evolución de la situación.

2. Que se presente un informe sobre esas consultas a las PARTES CONTRATANTES en su cuadragésimo tercer período de sesiones."¹⁰

8. Como material de antecedentes para las consultas, la Secretaría distribuyó una nota en la que se compilaba la información procedente de 16 notificaciones presentadas por partes contratantes en relación con las disposiciones jurídicas y las medidas aplicadas en relación con las mercancías cuya venta estaba prohibida en el país de origen. En la nota figuraba una lista de mercancías cuya venta estaba prohibida en el país de origen y cuya exportación también estaba prohibida, compilada a partir de información más detallada contenida en la nota sobre las leyes o reglamentos relativos a la producción y el comercio de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen. También se enumeraban en ella todas las notificaciones recibidas por la Secretaría sobre exportaciones de mercancías cuya venta estaba prohibida en el país de origen. Entre los productos citados se encontraban algunos productos químicos, como líquidos extremadamente tóxicos, benceno, algunos cloruros, TPC y amianto; algunos productos farmacéuticos para uso humano y animal, cuasimedicamentos y sustancias carcinógenas; abonos, plaguicidas y otros productos para la preservación de plantas; aditivos y otras sustancias utilizadas en la producción de piensos y alimentos para el consumo humano; agentes de limpieza, cosméticos y productos de perfumería; algunas sustancias utilizadas en la fabricación de juguetes y accesorios de automóvil; plomo y otras sustancias utilizadas para el tratamiento de productos; determinados productos peligrosos, como bujías, algunos aviones de juguete, calzado de agua inestable, sustancias inflamables, pólvora, explosivos y material militar; sustancias radiactivas; y sustancias venenosas o nocivas.¹¹

9. En las consultas oficiosas celebradas antes del período de sesiones de 1987 de las PARTES CONTRATANTES, algunas delegaciones señalaron que el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) había adoptado recientemente directrices sobre los productos químicos prohibidos o sometidos a restricciones rigurosas que eran objeto de comercio internacional. Se observó que para determinar la naturaleza y el tipo de las medidas que podrían adoptarse en el GATT, era preciso estudiar cuidadosamente esas directrices, así como la labor realizada por otras organizaciones. Por consiguiente, en su cuadragésimo tercer período de sesiones las PARTES CONTRATANTES acordaron que se dedicara más tiempo a consultas y que se presentara al cuadragésimo cuarto período de sesiones un informe sobre las ulteriores consultas celebradas.

¹⁰IBDD 33S/58.

¹¹DPG/W/3, de 23 de diciembre de 1986.

10. Durante 1988 se celebraron dos rondas de consultas. En el cuadragésimo cuarto período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES, el entonces Director General Adjunto, Sr. C. Carlisle, informó sobre los progresos logrados en esas consultas. Explicó que la delegación de Nigeria había distribuido, como base para el debate, una nota técnica en la que se explicaba el tipo de medidas que esa delegación proponía que se adoptaran para controlar el comercio de tales productos.¹² El Director General Adjunto añadió que:

"... En las consultas, se pidió a las delegaciones que en sus observaciones respondieran los puntos siguientes: 1) ¿qué impide a los países en desarrollo adoptar medidas para prohibir las importaciones de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen, o de desperdicios peligrosos? 2) ¿qué hacen para controlar las exportaciones de tales productos los países exportadores? 3) ¿con qué grado de eficacia funcionan las disposiciones adoptadas en otras organizaciones internacionales? Se pidió que a esta última pregunta respondieran tanto los países en desarrollo como los países desarrollados.

En cuanto al primer punto, algunos países en desarrollo explicaron que en la mayoría de los casos o podían prohibir las importaciones de productos peligrosos porque sus gobiernos desconocían que los productos estuvieran prohibidos o que su venta estuviera restringida en los mercados nacionales de los países exportadores. Según dichos países, era también frecuente, sobre todo en el caso de las sustancias y desperdicios peligrosos, que los exportadores hicieran falsas declaraciones. Además, las autoridades aduaneras de un gran número de países en desarrollo carecían de medios de prueba adecuados para verificar la veracidad de las declaraciones de los exportadores. En opinión de los representantes de los países en desarrollo, la falta de reglamentos de protección del consumidor en muchos de estos países permitía también a otros países comercializar en aquéllos ciertos productos farmacéuticos, alimenticios y otros aun después de la fecha de caducidad especificada en las etiquetas de fabricación.

En cuanto a las medidas adoptadas por los países desarrollados para controlar el comercio de tales productos, la mayoría de las delegaciones respondieron que sus gobiernos consideraban que el problema era grave, e hicieron alusión a medidas en virtud de las cuales se exigía que las compañías notificaran a las autoridades si algún producto de venta prohibida estaba exportándose a otros países. Algunos países desarrollados dijeron que estaban examinando ulteriores medidas para dar mayor eficacia a los sistemas de intercambio de información.

En cuanto al tercer punto, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo consideraban que organizaciones internacionales como la OMS, FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, además de organizaciones regionales como la OCDE, han elaborado directrices y procedimientos útiles de notificación e intercambio de información. No obstante, algunas delegaciones estimaban que sería menester examinar más de cerca el funcionamiento de esas disposiciones para decidir si una acción complementaria en el GATT sería necesaria y eficaz. Esas delegaciones señalaron asimismo que las cuestiones de esta esfera eran de carácter muy técnico, y pusieron en duda que los expertos en política comercial que asisten normalmente a las reuniones del GATT puedan tratar eficazmente esas cuestiones. Sin embargo, algunas de esas delegaciones estimaban que el GATT puede, en la fase actual, desempeñar una función útil de vigilancia del trabajo realizado en otras organizaciones. Otras delegaciones, sobre todo de países en desarrollo, explicaron que uno de los motivos por los que no son plenamente eficaces las disposiciones elaboradas por otras organizaciones internacionales es que tales disposiciones tienen carácter voluntario y no imponen obligaciones vinculantes. Estas delegaciones estimaron que la experiencia habida con tales disposiciones

¹²Ese documento se distribuyó posteriormente con la signatura MTN.GNG/W/18, de 17 de noviembre de 1988.

es un tanto ambigua. Consideraban pues que es necesario recurrir al GATT para imponer obligaciones vinculantes tanto a los países exportadores como a los importadores. Afirmaron que la finalidad de cualquier curso de acción que se siga en el GATT no será duplicar los procedimientos de notificación e intercambio de información preparados en otras organizaciones, sino elaborar normas para reforzar la aplicación de esos esquemas."¹³

11. Las PARTES CONTRATANTES acordaron solicitar a la Secretaría que celebrara nuevas consultas oficiosas con el fin de permitir al Consejo que tomara, de ser necesario, las disposiciones adecuadas para proseguir su labor. Tras esa reunión, las delegaciones del Camerún, Côte d'Ivoire, Nigeria, Sri Lanka y el Zaire, distribuyeron una comunicación al Comité de Negociaciones Comerciales, en un intento de que se incluyera esa cuestión en el programa de la Reunión Ministerial de Montreal. En esa comunicación, basada en la nota técnica anterior, se sugería cómo podía irse construyendo un mecanismo o acuerdo en esa esfera.¹⁴ Se describía el alcance del problema, se explicaba por qué eran insuficientes las actividades que se estaban realizando en el plano internacional y se definían objetivos prioritarios de un posible acuerdo del GATT en esa esfera. En particular, se sugería lo siguiente:

"Una forma de acción en el GATT pudiera ser la elaboración de un acuerdo o código de conducta que podría basarse en las disposiciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio negociado durante la Ronda de Tokio de negociaciones comerciales.

El objetivo principal de un acuerdo de esta clase podría ser establecer el principio de que los gobiernos, al formular reglamentos, presten la debida atención a la protección del medio ambiente y de la salud y la vida no sólo en su propio país, o para su propia población, sino también en los demás países y para las demás poblaciones. Entre otras cosas, el acuerdo se aplicaría:

- i) a todos los productos que en el mercado interno de un país;
 - a) sean de venta prohibida
 - b) sean de venta rigurosamente restringida o controlada; o
 - c) se hayan retirado de la venta
- ii) a los desechos industriales, tóxicos y de otro tipo cuya colocación en el mercado interno esté rigurosamente restringida o controlada

por considerarse peligrosas para la salud o la seguridad humanas, la vida o la salud de los animales o plantas o por otras razones relativas a la protección del medio ambiente.

En relación con los desechos industriales y tóxicos y otras sustancias (por ejemplo, las comprendidas en el inciso ii) antes mencionado) que se consideran intrínsecamente peligrosas, las normas del acuerdo deberían disponer la prohibición total de las exportaciones. Tal prohibición estaría en consonancia con el principio de que los desechos generados en un proceso de producción deben ser reciclados, tratados nuevamente o colocados en el país de fabricación, ya que, en la mayor parte de los casos, no es posible que el país exportador evalúe adecuadamente si las instalaciones de almacenamiento, reciclado u otras formas de colocación

¹³SR,44/2, de 30 de noviembre de 1988.

¹⁴MTN.TNC/W/14, de 30 de noviembre de 1988.

de los desechos son apropiadas en el país importador, especialmente cuando se trata de un país en desarrollo.

Con respecto a los demás productos (es decir, los comprendidos en el punto i) anterior) los gobiernos, al formular reglamentos, deben considerar debidamente si han de prohibirse o restringirse las exportaciones de esos productos. En los casos en que, teniendo en cuenta factores como las diferencias de medio ambiente y de clima entre los países, y los distintos hábitos alimentarios, no se considere conveniente ni apropiado prohibir las exportaciones, los reglamentos sólo deberán permitir las exportaciones sobre la base de licencias de exportación y deberán establecer las condiciones en que se expedirán dichas licencias. Entre esas condiciones, pudiera figurar el compromiso de que en el caso de productos comprendidos en este grupo (es decir productos químicos y plaguicidas peligrosos, materiales radiactivos y desechos tóxicos), sólo se expedirán licencias de exportación después de haber recibido de la autoridad encargada del control en el país importador el "consentimiento previo con conocimiento de causa" para la importación de los productos.

Además de establecer normas por las cuales se rijan las medidas que deben adoptar los países exportadores, el acuerdo debe perseguir la finalidad de reforzar las medidas que están adoptando organizaciones tales como las Naciones Unidas, la FAO, la OMS y el PNUMA, instando a sus países miembros a que participen eficazmente en los planes de notificación e intercambio de información, así como en la labor técnica pertinente de dichas organizaciones.

Por último, el dispositivo institucional que habrá de establecerse en virtud de tal acuerdo deberá permitir, mediante la creación de mecanismos para la celebración de consultas y la solución de diferencias, que la comunidad internacional vigile y controle de forma efectiva el comercio de esos productos."¹⁵

12. La cuestión se planteó en la Reunión Ministerial de Montreal, celebrada en diciembre de 1988. En sus observaciones finales, el Presidente señaló que:

"En sus declaraciones, algunas delegaciones han insistido en la necesidad de que en el GATT se tomen medidas inmediatas para someter a control el comercio de productos cuya venta está prohibida en el país de origen y otras sustancias peligrosas. Entiende el orador que esta cuestión está incluida en el programa de trabajo regular del GATT y por ello sugiere que se pida al Consejo del GATT que adopte sin demora una decisión adecuada para examinar las medidas complementarias que pudiera ser necesario adoptar en el GATT, teniendo en cuenta la labor realizada por otros organismos internacionales"¹⁶

El Grupo de Trabajo de la Exportación de Mercancías cuya Venta está Prohibida en el País de Origen

13. En la siguiente reunión del Consejo del GATT, celebrada el 20 de diciembre de 1988, se acordó incluir el tema de las exportaciones de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen en el programa de la reunión de febrero del Consejo del GATT, para que éste siguiera examinándolo. Durante la primera mitad de 1989 siguieron celebrándose consultas oficiosas para determinar qué otras medidas procedía adoptar. Por último, en julio de 1989, el Consejo del GATT acordó establecer un Grupo de Trabajo para examinar la cuestión en sus aspectos técnicos. El mandato de ese Grupo de Trabajo era el siguiente:

¹⁵*Id.*, páginas 3 a 5.

¹⁶MTN.TNC/8(MIN), de 17 de enero de 1988, páginas 11 y 12.

"... el Consejo acuerda establecer un Grupo de Trabajo de la exportación de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen y otras sustancias peligrosas, el cual, a la luz de las obligaciones y principios del GATT y teniendo presente la labor de otras organizaciones internacionales sobre esos productos y sustancias, examinará los aspectos relacionados con el comercio que no estén tratados de manera adecuada, y rendirá informe al Consejo.

El Grupo de Trabajo deberá tener en cuenta las características particulares de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen y las de otras sustancias peligrosas, así como la necesidad de evitar toda duplicación de la labor de otras organizaciones internacionales.

El Grupo de Trabajo deberá ultimar sus trabajos el 30 de septiembre de 1990 a más tardar y presentar un informe sobre la marcha de los mismos en el cuadragésimo quinto período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES, en 1989.¹⁷

14. El Grupo de Trabajo celebró 15 reuniones entre septiembre de 1989 y junio de 1991. En la primera reunión, el Grupo de Trabajo, a la luz de su mandato de examinar los aspectos relacionados con el comercio teniendo presente la labor realizada por otras organizaciones internacionales, acordó invitar a que participaran como observadores en sus reuniones a representantes del PNUMA, la FAO, la OMS, la Secretaría de las Naciones Unidas, la OIT, el Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales, la OCDE, el CCI y el Organismo Internacional de Energía Atómica. A lo largo de la labor del Grupo de Trabajo, esos representantes aportaron a las delegaciones, al Presidente, y a la Secretaría conocimientos técnicos y asesoramiento. En muchos casos esas aportaciones se incluyeron, como anexos en las actas de las reuniones.¹⁸

15. En la segunda reunión, la delegación de Nigeria presentó un documento que contenía información concreta sobre las mercancías cuya venta estaba prohibida en el país de origen y otras sustancias peligrosas que se habían exportado a Nigeria, y que aportaba ideas para la elaboración de un acuerdo o instrumento jurídico en el marco del GATT basado en los elementos y los productos descritos en la anterior propuesta de Nigeria (MTN.GNG/W/18, presentada conjuntamente con las delegaciones del Camerún, Côte d'Ivoire, Sri Lanka y el Zaire). En el documento se destacó que en cualquier acuerdo de ese tipo debían destacarse tres puntos:

- debe prohibirse o reglamentarse el comercio internacional de mercancías cuya venta, distribución o consumo hayan sido prohibidos o rigurosamente restringidos en el país de producción;
- también deben someterse a control los productos destinados a la reexportación;
- la carga de la decisión de importar o no importar un producto deberá repartirse equitativamente entre el país importador y el exportador.¹⁹

¹⁷C/W/605/Rev.1, de 19 de julio de 1989.

¹⁸Las actas de las reuniones del Grupo de Trabajo figuran en los documentos Spec(89)48 y 52; Spec(90)3, 12, 20, 27, 36 y 39; y Spec(91)3, 4, 23, 60 y 62.

¹⁹DPG/W/5, de 8 de noviembre de 1989.

16. La Secretaría preparó para la cuarta reunión un documento titulado "Nota documental sobre las disposiciones pertinentes del Acuerdo General y de los Acuerdos de las NCM y sobre las propuestas correspondientes de la Ronda Uruguay".²⁰ En esa nota, que estimuló el debate en el Grupo de Trabajo, se examinó la pertinencia, en el contexto de esa labor, de los artículos I, III, XI, XIII y XX del Acuerdo General, así como del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación. En un anexo a la nota se examinaban los sistemas de inspección previa a la expedición. La delegación del Camerún presentó una respuesta a la nota, que figura en el documento DPG/W/7.

17. En la quinta reunión, celebrada en mayo de 1990, las delegaciones del Camerún y Nigeria presentaron una propuesta para un acuerdo en esa esfera.²¹ Esa propuesta abarcaba los objetivos, los principios y el alcance de un acuerdo en esa esfera. Entre los elementos que debían incluirse en un acuerdo se contaban los siguientes:

- obligaciones vinculantes para las partes contratantes de controlar la exportación de productos cuya venta esté prohibida o rigurosamente restringida en el país de origen debido a que ponen en peligro la vida de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales, o el medio ambiente;
- las obligaciones de publicación previstas en el artículo X del Acuerdo General;
- la obligación vinculante para las partes contratantes de participar en los mecanismos de otras organizaciones internacionales que trabajen en esa esfera;
- mecanismos para la solución de diferencias que contengan disposiciones para la adopción de medidas provisionales tendentes a limitar los daños, y disposiciones para el pago de indemnizaciones como posible resultado de la aplicación de los procedimientos de solución de diferencias.

18. Las Comunidades Europeas presentaron una segunda propuesta.²² En la reunión, el representante de las CE señaló que las dos propuestas contenían elementos comunes, entre ellos el objetivo de garantizar la ulterior participación del GATT en esa esfera, pero también presentaban diferencias importantes. La propuesta de su delegación se centraba en diversos principios, entre ellos:

- el reconocimiento de la importancia de la adopción de medidas no sólo para proteger el propio medio ambiente, sino también el de otros países, y del valor de la labor realizada en esa esfera por otras organizaciones internacionales, cuya capacidad jurídica y cuyos conocimientos técnicos debían aprovecharse plenamente, evitando duplicaciones;
- el principio de que, cuando existieran ya acuerdos internacionales tendentes a promover los objetivos esbozados en la propuesta, las partes contratantes del GATT debían comprometerse a aceptarlos y aplicarlos;
- la necesidad de evitar que se crearan obstáculos innecesarios al comercio;

²⁰DPG/W/6, de 2 de febrero de 1990.

²¹DPG/W/8, de 30 de marzo de 1990.

²²DPG/W/9, de 17 de abril de 1990.

- la necesidad de transparencia y de publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo X del Acuerdo General; y
- la necesidad de un foro que permitiera examinar el funcionamiento del instrumento adoptado en el GATT a la luz de las novedades que se produjeran en relación con las disposiciones adoptadas por otras organizaciones internacionales.

19. El Presidente presentó, para que se examinara en la séptima reunión, un documento de trabajo que contenía un proyecto de Decisión sobre el comercio de productos prohibidos o sometidos a restricciones rigurosas y otras sustancias peligrosas, basado en las dos propuestas presentadas por el Camerún y Nigeria, por una parte y por la CE, por la otra, teniendo en cuenta las aclaraciones aportadas por sus respectivos patrocinadores y los comentarios formulados por otras delegaciones. Ese proyecto de Decisión se examinó, tanto en sus aspectos técnicos como en lo referente a su redacción, en esa reunión, en las cuatro reuniones siguientes y en reuniones oficiosas adicionales. El texto se revisó muchas veces atendiendo a las solicitudes y al asesoramiento de delegaciones y expertos técnicos. En septiembre de 1990, fecha en que debía concluir su labor el Grupo de Trabajo, era evidente que se necesitaba más tiempo. Por consiguiente, en la reunión del Consejo celebrada en septiembre de 1990, el Presidente pidió que se prorrogara el mandato del Grupo hasta finales de diciembre de 1990. En diciembre el Grupo ya había avanzado considerablemente en la elaboración del proyecto de Decisión. Las delegaciones del Camerún, Côte d'Ivoire, Nigeria, el Senegal y el Zaire comunicaron el texto, por conducto del Grupo de Negociaciones sobre Mercancías, a la Reunión Ministerial de Bruselas del Comité de Negociaciones Comerciales, en diciembre de 1990, con el fin de informar a la reunión sobre los progresos sustantivos logrados.²³ El Presidente del Grupo de Trabajo presentó asimismo en diciembre de 1990 al cuadragésimo sexto período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES un informe en el que figuraba el proyecto de Decisión y en el que explicaba se que el Grupo no había podido llegar a un consenso sobre el texto actual, pero que, habida cuenta de los considerables progresos realizados, se solicitaba que se volviera a prorrogar hasta finales de marzo de 1991 el mandato del Grupo a fin de que éste pudiera concluir su labor.

20. En una reunión celebrada en marzo, ante la imposibilidad de resolver los problemas que planteaba el texto, el Grupo de Trabajo acordó solicitar al Consejo una nueva prórroga de su mandato hasta el 30 de junio de 1991. Se convino en que, durante ese período, los Estados Unidos, que eran la delegación que planteaba reservas al texto, tratarían de elaborar una propuesta de revisión y celebrarían consultas al respecto con las delegaciones. Esas revisiones propuestas se distribuyeron en el documento DPG/W/10 y se examinaron en la siguiente reunión, celebrada en mayo. El texto se revisó posteriormente para incorporar a él algunas de las propuestas, aunque sobre otras no pudo llegarse a un acuerdo. En consecuencia, los Estados Unidos presentaron otra propuesta (DPG/W/11) que se examinó en la reunión final del Grupo de Trabajo de 1991. A pesar de todos los esfuerzos, no pudo llegarse a un acuerdo sobre una versión definitiva del texto.

21. En la reunión de julio de 1991 del Consejo, el Presidente del Grupo de Trabajo informó sobre los resultados de los esfuerzos del Grupo. Presentó un informe al que se adjuntaba el proyecto de Decisión y en el que explicaba que:

"Actualmente, aunque en el texto adjunto ha sido acordado por las delegaciones en general, el país que ha formulado la reserva aún no puede aceptarlo sin modificaciones. Cabe destacar también que algunas delegaciones propusieron modificaciones de redacción que se consignan en las actas de las reuniones (Spec(91)60 y Spec(91)62). En consecuencia, el Grupo de Trabajo no ha podido completar su labor en el tiempo que se le había asignado.

²³Esa comunicación figura en el documento MTN.TNC/W/39/Rev.1, de 29 de noviembre de 1990.

No obstante, el Grupo de Trabajo considera que sigue siendo urgente la necesidad de introducir un sistema de notificación para las mercancías prohibidas en el país de origen. El Grupo recomienda, pues, que el Consejo tome las disposiciones necesarias para que prosiga el debate sobre el proyecto de Decisión, ya sea prorrogando el mandato del Grupo o por algún otro medio apropiado."²⁵

El Consejo acordó prorrogar el mandato del Grupo de Trabajo por un período de tres meses a partir de la fecha de la siguiente reunión del Grupo, y autorizó al Presidente del Consejo a que celebrara consultas sobre las fechas en que debía convocarse esa reunión. El Grupo de Trabajo no volvió a reunirse. En la Decisión Ministerial sobre el comercio de servicios y el medio ambiente adoptada en Marrakech se acordó incorporar esa cuestión al programa de trabajo del Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC.²⁶

El proyecto de Decisión sobre los productos prohibidos o rigurosamente restringidos en el mercado interno

22. En el texto de julio de 1991 del proyecto de Decisión se establece un sistema de notificación para todos los productos, sustancias o desechos que una parte contratante haya determinado que entrañan "un peligro grave e inmediato para la salud y la vida de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales o para el medio ambiente en su territorio, y que por esa razón estén prohibidos o rigurosamente restringidos en el mercado interno de esa parte contratante por una medida gubernamental normativa, con exclusión de: los materiales fisionables y radiactivos; y las armas, municiones y material de guerra para abastecer directa o indirectamente a las fuerzas armadas". El sistema de notificación se aplicaría también a los productos, sustancias y desechos que una parte contratante haya determinado que son "peligrosos, por lo que deben ser eliminados de conformidad con una medida gubernamental normativa, con exclusión de: los desechos que, por ser fisionables o radiactivos, estén sometidos a otros sistemas de control internacional, incluidos instrumentos internacionales, que se apliquen específicamente a los materiales fisionables o radiactivos; y los desechos derivados de las operaciones normales de los buques, cuya descarga esté regulada por otro instrumento internacional."²⁷

23. En el proyecto de Decisión se establecen esencialmente tres obligaciones en relación con los productos cuya venta está prohibida o severamente restringida en el mercado interno. En primer lugar, la parte contratante deberá estudiar si procede aplicar medidas equivalentes también a la exportación del producto de que se trate. En segundo lugar, de no aplicarse tales medidas a las exportaciones, la parte contratante deberá notificar prontamente a la Secretaría del GATT las medidas adoptadas, así como las razones por las que se adoptaron. La Secretaría del GATT transmitirá todas las notificaciones a los servicios de información que la parte contratante haya establecido o designado de conformidad con lo dispuesto en la Decisión. En tercer lugar, la parte contratante facilitará información adicional sobre el producto si así se le solicita.²⁸

24. Por último, el proyecto de Decisión prevé la publicación por cada parte contratante de todas sus leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que guarden relación con el comercio internacional de los productos afectados, el establecimiento de un comité para la celebración de consultas sobre el funcionamiento y la aplicación de la Decisión, la prestación de asistencia técnica en condiciones

²⁵L/6872, de 2 de julio de 1991.

²⁶MTN.TNC/W/141, de 29 de marzo de 1994. Véase el punto séptimo del programa de trabajo, pág. 3.

²⁷L/6872, artículo 1.

²⁸L/6872, artículo 3.

mutuamente convenidas, y la celebración de consultas entre las partes contratantes sobre la aplicación de la Decisión, con miras a encontrar soluciones mutuamente satisfactorias a los problemas que surjan, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos XXII y XXIII del Acuerdo General.

25. La participación de expertos técnicos de las organizaciones intergubernamentales pertinentes en las reuniones ordinarias y en muchas de las oficiosas se aprovechó, en particular, para elaborar definiciones adecuadas de los términos "prohibidos" y "rigurosamente restringidos", sobre la base de los conocimientos acumulados y de la labor realizada en esa esfera por otras organizaciones internacionales²⁹, para definir excepciones al ámbito de aplicación de la Decisión y para llegar a un entendimiento preciso del ámbito de aplicación, el funcionamiento, los mecanismos de aplicación y los procedimientos de solución de diferencias de otros acuerdos internacionales conexos. El ámbito de aplicación del proyecto de Decisión se basa en esa labor, al igual que las disposiciones relativas a la coordinación con otros instrumentos internacionales pertinentes.

26. En el mandato del Grupo de Trabajo se estipuló, como cuestión importante, la necesidad de evitar la duplicación de actividades en esa esfera. A ese respecto, la Secretaría realizó una labor importante para determinar qué otros mecanismos internacionales existentes se aplicaban a esos tipos de productos y para llegar a un conocimiento de sus disposiciones y obligaciones. Como resultado de esa labor, se determinó que existían 11 instrumentos internacionales de ese tipo, que se enumeraron en el anexo I del proyecto de Decisión. En el texto se intenta dar preferencia a las obligaciones dimanantes de esos instrumentos al señalarse que la obligación de notificar no se aplicará si el producto afectado está comprendido en uno de los instrumentos enumerados en el anexo y la parte contratante exportadora es signataria de dicho instrumento o participante en él. En el proyecto de Decisión también se señala que sus disposiciones no afectarán a los derechos y obligaciones de los signatarios de dichos instrumentos o participantes en ellos, y que la cuestión de si una parte contratante que sea signataria de un instrumento internacional enumerado en el anexo o participante en él aplica o no los procedimientos establecidos en dicho instrumento la dirimirá el órgano que, en virtud del mismo, sea competente para hacerlo. En la Decisión también se alienta a las partes contratantes que sean signatarias de otros instrumentos internacionales o participantes en ellos a que intervengan plenamente en las actividades emprendidas para aplicarlos y procuren ampliar su ámbito de aplicación a nuevos productos cuando proceda. Se alienta asimismo a las demás partes contratantes a que pasen a ser signatarias de dichos instrumentos o participantes en ellos.

27. Durante la negociación del proyecto de Decisión, la cuestión de su ámbito de aplicación se trató teniendo en cuenta los resultados del análisis de los otros instrumentos internacionales existentes en esa esfera. En particular, el análisis reveló que existían ya sistemas de intercambio de información relativamente desarrollados en relación con tres importantes grupos de productos (productos químicos, plaguicidas y productos farmacéuticos). En lo referente a otros grupos de productos, en particular los productos de consumo, esa labor no se había iniciado o se encontraba todavía en un estadio preliminar. Aunque la Lista Consolidada de las Naciones Unidas de productos cuyo consumo y/o venta han sido prohibidos, sometidos a restricciones rigurosas y/o no aprobados por los gobiernos contiene alguna información sobre los productos de consumo, esa Lista es básicamente un documento de referencia. Además, sólo contiene información sobre los productos de consumo que son peligrosos

²⁹Esas definiciones se basaron esencialmente en las definiciones de productos químicos, plaguicidas, abonos y productos farmacéuticos prohibidos o severamente restringidos que ya se habían elaborado y se utilizaban, respectivamente, en los siguientes acuerdos internacionales: las Directrices de Londres del PNUMA para el intercambio de información acerca de productos químicos objeto de comercio internacional, el Código Internacional de Conducta de la FAO para la distribución y utilización de plaguicidas, el Sistema de Certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, de la OMS, y la Lista Consolidada de las Naciones Unidas de productos cuyo consumo y/o venta han sido prohibidos, sometidos a restricciones rigurosas y/o no aprobados por los gobiernos.

por su composición química. La Recomendación de la OCDE sobre la seguridad de los productos de consumo y el procedimiento para la retirada de productos peligrosos vendidos al público, aunque resulta pertinente por el tipo de productos que abarca, sólo contiene recomendaciones para el intercambio de información entre los países de la OCDE.

28. Además, ese análisis reveló que buena parte de la labor de otros instrumentos internacionales se centraba en el desarrollo y la mejora de sistemas de intercambio de información sobre productos prohibidos, severamente restringidos o retirados del mercado de los países exportadores por su peligrosidad para la salud y la seguridad públicas y el medio ambiente. En todos esos sistemas, aunque se admite que incumbe al país importador adoptar medidas para proteger la salud de las personas y el medio ambiente, se trata de garantizar que las autoridades o empresas pertinentes de los países exportadores faciliten la información necesaria para que los países importadores puedan tomar decisiones fundamentadas sobre esos productos.

29. El análisis indicó asimismo que algunas de esas organizaciones se habían esforzado por elaborar principios y directrices que pudieran adoptar tanto los países exportadores como los importadores para controlar esos productos. Así, por ejemplo, el requisito de notificación anticipada a las autoridades designadas del país importador de que los productos químicos, los plaguicidas o los productos farmacéuticos que se prevé exportar están prohibidos o severamente restringidos en el país exportador, con el fin de que tales autoridades puedan decidir si conviene o no autorizar la importación de los productos; la elaboración del concepto de "consentimiento fundamentado previo" (CFP) en virtud del cual un país exportador sólo permitirá, las exportaciones de determinados productos químicos, plaguicidas o abonos prohibidos o severamente restringidos si el país importador da por escrito su consentimiento para efectuar esa importación; y la prohibición, cuando es factible y conveniente, de las exportaciones de mercancías que se considera que presentan inherentemente un peligro grave y directo para la vida humana o la salud y la seguridad de los consumidores.³⁰

Hechos recientes relacionados con ese tema

Hechos importantes ocurridos en relación con los instrumentos internacionales enumerados en el anexo I de la Decisión

30. En el anexo I del proyecto de Decisión se enumeran los nueve instrumentos internacionales que se consideran relacionados con el tema de la Decisión. Se trata del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, las Directrices de Londres para el intercambio de información acerca de productos químicos objeto de comercio internacional, modificadas en 1989 (tres instrumentos administrados por el PNUMA); el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas (administrado por la FAO); el Sistema de Certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional (OMS); el Convenio de 1971 sobre sustancias sicotrópicas y la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972 y la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Naciones Unidas); y el Convenio sobre la Seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo (OIT). También se hace referencia a otros dos instrumentos, la Lista Consolidada de las Naciones Unidas de productos cuyo consumo y/o venta han sido prohibidos, sometidos a restricciones rigurosas y/o no aprobados por los gobiernos (Naciones Unidas), que es un documento de referencia que contiene información sobre esos productos, y la Recomendación sobre la seguridad de los productos de consumo y el procedimiento para la retirada de productos peligrosos vendidos al

³⁰L/6459/Rev.1, página 21.

público (OCDE), que también contiene información sobre esos productos de consumo en lo que atañe a los países de la OCDE.

31. En el documento PC/SCTE/W/3, de 13 de octubre de 1994, se exponen las medidas recientes adoptadas en relación con el Protocolo de Montreal, el Convenio de Basilea y las Directrices de Londres. Algunas de las medidas reseñadas en ese documento tienen especial importancia para la cuestión de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen. En primer lugar, en lo que se refiere al Protocolo de Montreal, las Modificaciones de Copenhague aceleraron el calendario para la eliminación progresiva de las sustancias controladas incluidas en el anexo A (los CFC originarios y tres halones) y en el anexo B del Protocolo (los productos químicos añadidos en las modificaciones de Londres: otros CFC plenamente halogenados, el tetracloruro de carbono y el metilcloroformo). Los países desarrollados decidieron el 1º de enero de 1994 suprimir progresivamente la producción y el consumo de halones, y los CFC enumerados en ambos anexos del Protocolo han de quedar suprimidos en los países industrializados para el 1º de enero de 1996. Además, las Modificaciones de Copenhague añadieron a la lista de sustancias controladas un anexo C en el que se incluyeron los hidrobromofluorocarbonos (HBFC), los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), y el bromuro de metilo. El consumo y la producción de HBFC han de irse eliminando progresivamente hasta 1996, y los de HCFC hasta 2030. El consumo de bromuro de metilo ha de quedar congelado para 1995, y a partir de esa fecha se decidirá, a la luz de nuevos estudios, sobre las ulteriores medidas de control que convenga adoptar.

32. Además, en la Quinta Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, celebrada en noviembre de 1993, se decidió que técnicamente no era viable imponer ni la prohibición ni restricciones a la importación de productos que, aunque elaborados con sustancias controladas en el anexo A, no las contenían. En la Sexta Reunión de las Partes, celebrada en octubre de 1994, se decidió que no era viable ni necesario elaborar una lista de productos que contuvieran las sustancias controladas del anexo B con el fin de prohibir las importaciones de esos productos procedentes de países que no son Partes, como se había hecho en el caso del anexo A, habida cuenta de que en Copenhague se había acelerado el calendario para la eliminación progresiva de las sustancias incluidas en el anexo B.

33. En lo referente al Convenio de Basilea, cabe destacar dos medidas relacionadas con la cuestión de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen. La primera es la Decisión adoptada en la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en marzo de 1994, de prohibir todas las exportaciones de desechos peligrosos para su eliminación definitiva de los países de la OCDE a países no pertenecientes a la OCDE e ir suprimiendo hasta el 31 de diciembre de 1997 todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos que estén destinados a operaciones de reciclado o recuperación entre países de la OCDE y países de fuera de la OCDE. Los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos dentro de la OCDE y dentro de países no pertenecientes a la OCDE continuarán estando sujetos al procedimiento de consentimiento fundamentado previo (CFT) que establece el Convenio. En la reunión más reciente del Comité *ad hoc* para la aplicación del Convenio de Basilea (12-16 de diciembre de 1994), se adoptó una Decisión por la que se instó a las Partes a que facilitaran a la Secretaría, a más tardar en febrero de 1995, información sobre su legislación nacional pertinente, para que se pudiera presentar un informe completo a la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes (que se celebrará del 18 al 22 de septiembre de 1995).

34. En la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes también se adoptó la decisión de convocar un grupo de trabajo *ad hoc* de expertos jurídicos y técnicos encargado de examinar y elaborar un proyecto de protocolo sobre la responsabilidad y la indemnización de los daños resultantes del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación. Ese Grupo se reunió por segunda vez del 10 al 14 de octubre de 1994. El objetivo del protocolo es establecer un régimen amplio que permita la atribución de responsabilidades y una indemnización pronta y apropiada, incluidas medidas de rehabilitación del medio ambiente, por daños resultantes del movimiento transfronterizo de desechos

peligrosos y otros desechos y su eliminación. Se han elaborado proyectos de artículo del protocolo, todavía con mucho texto entre corchetes, que se seguirán examinando en la próxima reunión del Grupo, del 3 al 7 de abril de 1995. El artículo 4 (responsabilidad), contiene tres textos alternativos que atribuyen la responsabilidad de los daños a la persona o entidad que genera los desechos, o al exportador y/o a cualquier persona, incluidos el encargado de la eliminación de los desechos, el corredor y/o el importador, que controle los desechos peligrosos o participe en el movimiento transfronterizo o la eliminación de esos desechos, o a cualquier persona que en el momento del incidente tenga control operativo de los desechos. En el artículo se prevén algunas excepciones. En cuanto al tráfico ilícito, se considera responsables a todas las personas que participen en las actividades ilegales. Además, en lo que respecta a la indemnización por pérdida o daño, el demandante puede solicitar las formas o modalidades de indemnización previstas en la legislación aplicable. En lo referente a la indemnización por daños al medio ambiente, en el artículo se estipula que, si es posible rehabilitar el medio ambiente, la indemnización se limitará al costo de las medidas de rehabilitación emprendidas o que se hayan de emprender, o al costo de devolver el medio ambiente a un estado comparable al de antes de los daños. Si no es posible la rehabilitación del medio ambiente, se propusieron otras dos formas posibles de calcular la indemnización. El artículo 7 estipula que las Partes que sean Estados de exportación, de tránsito o de importación deberán garantizar que la responsabilidad estipulada en el Protocolo quede debidamente cubierta por seguros, bonos u otras garantías financieras. En virtud del artículo 8 se establecerá un fondo internacional para financiar medidas de respuesta inmediata a situaciones de emergencia y para el pago de indemnizaciones cuando no se aplique el régimen de responsabilidad civil o las indemnizaciones resultantes de la aplicación de ese régimen sean insuficientes.

35. El artículo 13, sobre las relaciones con otros acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales, contiene cuatro alternativas en caso de conflicto entre las disposiciones del presente protocolo y las disposiciones sobre responsabilidad e indemnización de otros acuerdos o mecanismos internacionales:

- se otorgará precedencia a las disposiciones del protocolo en la medida en que sean más favorables para el demandante [, en particular teniendo en cuenta los intereses de los países en desarrollo];
- excepto cuando todas las partes interesadas sean miembros de otro acuerdo internacional sobre responsabilidad e indemnización en relación con el transporte terrestre, aéreo o marítimo, se otorgará precedencia a las disposiciones del presente protocolo en la medida en que sean más favorables para el demandante [en particular teniendo en cuenta los intereses de los países en desarrollo];
- se otorgará precedencia a las disposiciones del presente protocolo, a menos que los daños estén relacionados con desechos a los que se apliquen específicamente instrumentos internacionales o regionales sobre responsabilidad e indemnización en relación con el transporte terrestre, aéreo o marítimo;
- excepto cuando todas las partes interesadas sean miembros de otro acuerdo internacional sobre responsabilidad e indemnización en relación con el transporte terrestre, aéreo o marítimo, el demandante tendrá derecho a escoger el régimen de indemnización que se haya de aplicar.

36. Por último, conviene señalar que el Comité *ad hoc* pidió a la Secretaría que preparara una evaluación de la eficacia del Convenio para la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, que debía celebrarse en 1995. En ese estudio, entre otras cosas, se tendrán plenamente en cuenta los mecanismos institucionales existentes del Convenio de Basilea, así como las novedades surgidas en el contexto del Convenio, y se aprovechará la experiencia acumulada en el marco de otros acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente.

37. En cuanto a las Directrices de Londres, en el documento PC/SCTE/W/3 se presenta un panorama general de su actual estado de aplicación. De particular interés son los debates encaminados a la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo (CFP). Se estableció un grupo de trabajo encargado de examinar modalidades para la elaboración de tal instrumento, que celebró dos reuniones con participación de expertos de los gobiernos y representantes de las organizaciones pertinentes. El grupo de trabajo examinó la experiencia del primer año de funcionamiento pleno del procedimiento de CFP y elaboró un conjunto de elementos para el instrumento jurídicamente vinculante. Esos elementos abarcan los objetivos, el ámbito de aplicación, las exenciones, las definiciones y las obligaciones generales que pueden negociarse para su inclusión en el documento definitivo. Los días 1º y 2 de diciembre de 1994 se celebró una reunión consultiva oficiosa para examinar cuestiones relacionadas con esos elementos. Los participantes en la reunión aportaron sus opiniones y formularon recomendaciones sobre esas cuestiones, con miras a la preparación de un texto inicial para la negociación de un convenio sobre el CFP. En esa reunión se propuso el calendario para la elaboración del convenio, a reserva de las decisiones que adoptara al respecto el Consejo de Administración del PNUMA en mayo de 1995:

septiembre/octubre de 1995: reunión de organización de un grupo de expertos designados por los gobiernos;

diciembre de 1995/enero de 1996: primer período de sesiones de un grupo intergubernamental de negociación con el mandato de preparar un convenio sobre el consentimiento fundamentado previo (CFP);

abril/mayo de 1996: segundo período de sesiones del Grupo intergubernamental de negociación;

octubre/noviembre de 1996: tercer período de sesiones del grupo intergubernamental de negociación y conferencia de plenipotenciarios para aprobar el convenio.

Se convino en que la Directora Ejecutiva del PNUMA pediría al Consejo de Administración, en el período de sesiones que se celebraría en mayo de 1995, que le confiriera el mandato de iniciar las negociaciones a fin de preparar un instrumento jurídicamente vinculante para la aplicación del procedimiento de CFP, con vistas a concluir ese instrumento, de ser posible, para 1997, y habida cuenta de que el Consejo de la FAO estaba de acuerdo en su preparación.

38. El objetivo del instrumento sería hacer jurídicamente vinculante el procedimiento de CFP, incluido su funcionamiento, sobre la base del procedimiento que figura en las Directrices de Londres y en el Código Internacional de Conducta de la FAO (que también aparece en la lista que figura en el anexo I de la Decisión del GATT L/6872). En la última reunión, celebrada en diciembre, varios participantes indicaron que en el Convenio también debería tratarse el control de los productos y de su utilización, aunque otros consideraban que esa responsabilidad debía corresponder a los gobiernos. Asimismo, se señaló que las responsabilidades respectivas de los países importadores y de los países exportadores debían definirse claramente en los objetivos. Por lo que se refería al alcance, el Convenio podía abarcar "los productos químicos prohibidos y rigurosamente restringidos por razones ambientales y de salud y las formulaciones de plaguicidas peligrosos que puedan ser causas de problemas para la salud [o el medio ambiente] en sus condiciones de uso en los países que no poseen una infraestructura adecuada".³¹ En la actualidad, los procedimientos de CFP relativos a los plaguicidas peligrosos no tienen en cuenta los daños para el medio ambiente. También se propuso que el documento abarcara los productos químicos y los desechos químicos peligrosos. Sin embargo, otros participantes no querían sobrecargar el procedimiento de CFP añadiendo un número tan amplio de productos químicos. El

³¹UNEP/PIC/WG.1/4/5, de 15 de abril de 1994, página 22.

procedimiento debía aplicarse a productos químicos específicos que ocasionan problemas para la salud y el medio ambiente en sus condiciones de uso en los países en desarrollo. Otros desechos químicos ya están comprendidos en el Convenio de Basilea. En la reunión de diciembre, se acordó que la Secretaría preparara un documento en el que se examinaran los criterios para la selección e inclusión de productos químicos en el procedimiento de CFP. Se propuso que la exportación de productos químicos peligrosos no incluidos en el procedimiento de CFP se tratara por medio de restricciones adecuadas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado.

39. Por lo que se refería a las obligaciones, las Partes intercambiarían información sobre esos productos químicos en el marco del comercio internacional, fortalecerían las infraestructuras y las instituciones nacionales existentes a fin de aplicar el procedimiento de CFP, incluidas las decisiones en materia de importación, y prohibirían las exportaciones que no se atuvieran a las decisiones de consentimiento fundamentado previo de los países importadores, cooperarían con otras Partes, y aplicarían unas prácticas de gestión adecuadas en la venta y la compra de plaguicidas. En los elementos, se elaboraron procedimientos específicos para esas obligaciones. En la reunión de diciembre se señaló que, además de las medidas de reglamentación, y para alcanzar los objetivos de esas medidas, era necesario adoptar medidas de otro tipo como los incentivos económicos y los memorandos de entendimiento.

40. Además, en la reunión de diciembre, varios participantes manifestaron la opinión de que era necesario prohibir la exportación de productos químicos cuya venta estaba prohibida en el país de origen. Esta propuesta parecía ser una iniciativa paralela a la prohibición convenida en el marco del Convenio de Basilea con respecto a los desechos peligrosos. Como otros representantes se mostraron contrarios a este enfoque, se convino en que la Secretaría preparara un estudio sobre casos reales de exportación de productos químicos cuya venta estaba prohibida en el país de origen que sirviera de base para ulteriores deliberaciones. En el estudio se examinarían también las consecuencias de una prohibición de las exportaciones de esa índole. El Gobierno patrocinador dijo que esperaba que el estudio pudiera concluirse antes del 1º de abril de 1995 a fin de examinar la cuestión en el siguiente período de sesiones del Consejo de Administración del PNUMA que se celebraría en mayo de 1995.

41. Los elementos también incluían la posibilidad de adoptar disposiciones relativas al comercio, "teniendo en cuenta los progresos logrados desde la aprobación de las Directrices de Londres a los efectos de la vinculación entre las políticas ambientales y comerciales y velando por que se mantenga plenamente la capacidad de adoptar medidas para proteger la salud humana y del medio ambiente".³² Esas disposiciones podrían incluir las siguientes obligaciones de las Partes:

"a) Las Partes velarán por que las medidas o actos gubernamentales de control adoptados con respecto a un producto químico importado sobre el cual se haya recibido información en aplicación del instrumento no sean más restrictivas que las aplicadas al mismo producto químico fabricado en el país o importado de un Estado diferente del que ha proporcionado la información en el entendimiento de que las autoridades públicas están facultadas para adoptar, en determinadas circunstancias y en ciertas condiciones, medidas [discriminatorias] [restrictivas del comercio] para proteger la salud y el medio ambiente (referencia: directriz 2 d) de las Directrices de Londres Enmendadas; GATT, artículo XX, b), g) ...;

³²*Id.* página 35.

b) Las disposiciones deberán reconocer también el derecho de las autoridades públicas de adoptar medidas más estrictas de protección de la salud y el medio ambiente que las previstas en el presente instrumento.

Nota: Se está considerando el empleo de términos más precisos en relación con la expresión "medidas discriminatorias y restrictivas del comercio" ... *supra*.

42. Además, los elementos incluían disposiciones para el control del comercio con Estados que no fueran Partes, como:

"Medidas relativas al control del comercio de productos químicos sometidos al procedimiento de CFP con Estados que no sean Partes (referencia: artículo 4 del Protocolo de Montreal).

Nota: Se ha presentado una propuesta para prohibir el comercio de productos químicos sujetos al procedimiento de CFP entre los Estados Partes y los que no son Partes. En la reunión se observó que esta cuestión debería enfocarse sobre la base de un estudio cuidadoso."³³

En la reunión de diciembre se acordó estudiar esta cuestión para tenerla en cuenta en la negociación del Convenio, incluidos sus aspectos comerciales. El representante del GATT que asistió a la reunión informó a las delegaciones de los trabajos que se estaban realizando sobre la relación entre las disposiciones de índole comercial de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y las del GATT, y de las normas pertinentes del GATT relativas a la cuestión. Los representantes de los gobiernos acordaron que se preparara un estudio sobre la cuestión en el que se tuvieran en cuenta los trabajos sobre comercio y medio ambiente que se estaban realizando en el GATT/OMC. Se propuso que al examinar la cuestión, se tuvieran en cuenta las disposiciones de los convenios y protocolos pertinentes, y que se estudiara el papel de las medidas comerciales unilaterales, como la prohibición de las importaciones por parte de un país, además del de las medidas comerciales multilaterales.

43. Por último, cabe señalar que los elementos contienen disposiciones relativas a la relación con otros convenios internacionales en las que se prevé que:

"las disposiciones del presente instrumento no afectarán a los derechos y obligaciones de ninguna Parte derivados de cualquier acuerdo internacional existente, excepto cuando el ejercicio de esos derechos y el cumplimiento de esas obligaciones sean contrarios al propósito de este instrumento (referencia: párrafo 1 del artículo 22 del Convenio sobre la Diversidad Biológica). Es necesario tener en cuenta los convenios existentes que guarden relación con el presente instrumento, como el Convenio de Basilea.

Nota: Se opinó que sería necesario examinar la relación existente con otros convenios pertinentes en lo que respecta a las obligaciones y otras consecuencias jurídicas ..."³⁴

44. La Secretaría del GATT seguirá manteniéndose al tanto de la evolución de esos instrumentos internacionales, así como de los demás instrumentos enumerados en el anexo I. Cuando proceda, la Secretaría preparará adiciones al presente documento para mantener informadas a las delegaciones.

³³*Id.* página 36.

³⁴*Id.*

Hechos pertinentes que se han producido en el marco del GATT

45. Desde julio de 1991, cuando expiró el mandato del Grupo de Trabajo de la Exportación de Mercancías cuya Venta está Prohibida en el País de Origen, la labor sobre cuestiones generales relacionadas con el comercio y el medio ambiente se ha realizado en el Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional. Ese Grupo celebró reuniones desde noviembre de 1991 hasta enero de 1994. En particular, el análisis y las deliberaciones sobre el primer tema del programa de ese Grupo -disposiciones comerciales de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y su relación con los principios y disposiciones del GATT- pueden aclarar algunas de las preocupaciones que se manifestaron en el contexto de los trabajos sobre las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen, y que se pueden seguir planteando, en particular con respecto a la relación entre las disposiciones del GATT y las de otros acuerdos internacionales, y a su aplicación extraterritorial y extrajurisdiccional. En el curso de los trabajos sobre las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen se plantearon y se empezaron a examinar algunas de esas cuestiones. En el anexo I de la presente nota figura un resumen de esas deliberaciones destinado a informar a las delegaciones de las preocupaciones que se manifestaron con respecto al Proyecto de Decisión que figura en el documento L/6872 y a facilitar una base para comparar la evolución de la forma de pensar con respecto a estas cuestiones.

46. La presente nota no se propone explicar en detalle las deliberaciones del Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional con respecto a estas cuestiones. En el informe del Embajador Ukawa, Presidente del Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional al cuadragésimo noveno período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES (L/7402) figura una exposición detallada del análisis y las reflexiones que surgieron de la labor del Grupo. Además, esas cuestiones, así como la cuestión de la solución de diferencias en el contexto de las obligaciones de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, seguirán siendo estudiadas por el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC. Es probable que se produzca una considerable superposición de estas esferas de análisis a medida que el Comité aborda los distintos temas de su programa de trabajo.

47. Al solicitar esta nota de la Secretaría, una delegación manifestó la opinión de que también podría resultar útil examinar la evolución que se había producido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el establecimiento del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias surgido de los resultados de la Ronda Uruguay. Aunque serán los gobiernos los que tengan que determinar la relación entre las obligaciones de esos nuevos acuerdos y los trabajos sobre las mercancías cuya venta está prohibida en el país origen a medida que avanzan los trabajos, puede resultar útil señalar que, en la labor del Grupo de Trabajo de la Exportación de Mercancías cuya Venta está Prohibida en el País de Origen, se hizo un esfuerzo en relación con la redacción de definiciones y el ámbito de cobertura para encontrar un lenguaje que definiera precisamente los parámetros de la cobertura a fin de ceñirlos exclusivamente al limitado número de productos que estaban prohibidos o rigurosamente restringidos debido a que entrañaban "un peligro grave e inmediato" para la salud y la vida de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales. A ese respecto, se había tratado de distinguir esas medidas de control de las normas que debían cumplir los productos y de los reglamentos técnicos más conocidos de las partes contratantes a través del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Habida cuenta de que el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se aprobó después de que se disolviera el Grupo de Trabajo de la Exportación de Mercancías cuya Venta esta Prohibida en el País de Origen, no se estudió su relación con ese grupo específico de productos. Sin embargo, si los trabajos futuros sobre mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen abarcan también productos agrícolas, como plantas y animales, o productos alimentarios, como los aditivos alimentarios, probablemente será necesario examinar la relación del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias con esta labor.

ANEXO I

Resumen de las deliberaciones del Grupo de Trabajo de la Exportación de Mercancías cuya Venta está Prohibida en el País de Origen sobre la relación entre las disposiciones del Acuerdo General y las de otros acuerdos internacionales y sobre las medidas que se aplican extraterritorial y extrajurisdiccionalmente

1. En la tercera reunión del Grupo de Trabajo empezó a debatirse la interpretación del artículo XX sobre la base del documento de la Secretaría DPG/W/6, aunque ni las deliberaciones ni el documento se tradujeron en medidas concretas. Después de explicar las condiciones que figuraban en el encabezamiento, en el documento se señalaba con respecto al artículo XX:

- "i) En virtud del subpárrafo b) del artículo XX, los países pueden adoptar las medidas que se consideren necesarias para proteger "la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales" prohibiendo las importaciones o las exportaciones de determinados productos o sustancias. Las prescripciones de este subpárrafo pueden también ser aplicables si, para proteger la salud de los consumidores, un país importador aplica normas más exigentes (como las que pueden aplicarse en el país exportador para las ventas interiores) que las aplicadas a los productos o sustancias peligrosos análogos de producción nacional, respecto al embalaje y etiquetado de ciertos productos importados que se consideren peligrosos por su propia naturaleza. Aun en el caso de que estas exigencias se consideren incompatibles con el principio de trato nacional establecido en el artículo III, podrían justificarse en el artículo XX si no constituyen una restricción encubierta al comercio internacional ni se aplican en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable.
- ii) Las disposiciones del subpárrafo d) que, entre otras cosas, permiten que los países tomen medidas relativas a las importaciones y a las exportaciones para "la prevención de prácticas que puedan inducir a error", pueden justificar determinadas prescripciones contenidas en los convenios y los instrumentos jurídicos vigentes:
 - i) que requieren que la exportación de productos que están sujetos a un sistema de aprobación y registro previo en el país exportador vaya acompañada de certificados en los que se dé información sobre la razón por la cual el producto no se ha registrado o no se ha permitido su venta en el mercado nacional, o
 - ii) que requieren, en el caso de exportaciones de productos y sustancias peligrosos o potencialmente peligrosos, que se dé información respecto a las condiciones aplicables a su venta en el mercado nacional y sus efectos nocivos para la salud y para el medio ambiente.
- iii) El apartado g), que se refiere a la conservación de los recursos naturales, puede ponerse en relación con las disposiciones relativas al comercio del Protocolo de Montreal, que establece directrices jurídicas para la reducción del consumo, la producción, las importaciones y las exportaciones de determinadas sustancias que reducen la capa de ozono.

Se señala la naturaleza permisiva de las disposiciones contenidas en el artículo XX. Se autoriza a los países a adoptar ciertas medidas internas que, de otro modo, podrían ser incompatibles con el Acuerdo General. Sin embargo, es importante observar en este contexto que el apartado h) del artículo reconoce que, en el caso de un acuerdo negociado

internacionalmente sobre un producto básico, los países pueden convenir en someterse a obligaciones vinculantes (para limitar la producción y/o imponer restricciones a las importaciones y las exportaciones), algunas de las cuales pueden no ser compatibles con las disposiciones básicas del Acuerdo General pero que se consideran necesarias para el logro de los objetivos de aquel acuerdo.

2. En la tercera reunión del Grupo de Trabajo, una delegación señaló, refiriéndose al documento DPG/W/6, que las disposiciones contenidas en los subpárrafos b) y d) del artículo XX "... eran facultativas; por lo tanto sería necesario imponer obligaciones más vinculantes para prohibir o restringir su exportación. En el caso de los desechos peligrosos y tóxicos, este principio podía llevarse más allá para imponer la obligación de eliminar tales desechos dentro del territorio del país que los hubiera generado. Se reconocía que una insistencia rígida en que las exportaciones en tales casos se prohibieran podía crear un desequilibrio, pero en realidad era probable que tales casos fueran pocos".³⁵ Otra delegación señaló que el documento DPG/W/6 parecía indicar que las disposiciones y las excepciones normales del GATT preveían muchas posibilidades de adoptar medidas en la esfera de los controles de la exportación por motivos de sanidad y de medio ambiente y señaló la necesidad de reforzar las disciplinas de los arreglos existentes. Otra delegación tenía dificultades con la noción de que las normas nacionales debían aplicarse necesariamente a las mercancías exportadas. En ese contexto, preveía una situación comercial inequitativa en la cual el exportador que tuviera las normas nacionales menos estrictas tendría ventaja sobre todos los demás proveedores, que satisficieran las prescripciones del país importador. No obstante, otra delegación dijo que las normas que eran buenas para una nación eran buenas también para otra. Añadió que una situación en la cual se exportaran productos inferiores a las normas a otros países, sabiendo que estos productos tendrían efectos peligrosos sobre la salud y el medio ambiente, no sólo era moralmente errónea sino que también estaba mal en todos los demás aspectos.³⁶ Una delegación señaló que no estaba de acuerdo con la interpretación que figuraba en el documento de que el artículo XX podía utilizarse para justificar la aplicación a las importaciones de normas más estrictas que las que se imponían a los productos de fabricación nacional. Otra delegación dijo que, en su opinión, el artículo XX permitía la introducción de restricciones y de otras medidas, así como de prohibiciones totales. Añadió que el subpárrafo b) del artículo XX sólo permitía restringir las importaciones y las exportaciones cuando se aplicaban restricciones similares a los productos que se vendían en el país.

3. En la sexta reunión, siguieron examinándose esas cuestiones en respuesta al Proyecto de Decisión propuesto por la CE (DPG/W/9, véase el párrafo 17):

"Con respecto a las medidas internacionales, aunque generalmente se mostraron satisfechas con la propuesta contenida en el documento DPG/W/9, algunas delegaciones destacaron la compleja cuestión jurídica que podía derivarse de imponer a las partes contratantes del GATT obligaciones vinculantes de otros acuerdos internacionales. Tres delegaciones opinaron que la formulación de cualquier acuerdo negociado en el GATT debía basarse en un planteamiento de "hacer todo lo posible" porque el GATT no podía imponer obligaciones a sus partes contratantes para aceptar y aplicar los instrumentos adoptados en el marco de otras organizaciones internacionales". El delegado de la Comunidad Económica Europea dijo que su propuesta era de naturaleza exhortativa en cuanto a las obligaciones sustantivas establecidas en los instrumentos de otras organizaciones.³⁷

³⁵Spec(90)12, página 2.

³⁶*Id.*

³⁷Spec(90)27, página 2.

El representante de la CE, señaló con respecto a su propuesta, el precedente del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, y dijo que, en virtud de ese Acuerdo, se instaba a las partes contratantes a aplicar las normas internacionales aprobadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO) o por otras organizaciones internacionales, cuando las hubiere. Ese es el modelo que pretendían seguir.

4. En esa reunión, también se examinó la cuestión de la solución de diferencias en relación con el Proyecto de Decisión propuesto por Nigeria y el Camerún (DPG/W/8, véase el párrafo 17):

"... Otra delegación estimó que cualquier diferencia que surgiera en el marco de un acuerdo en esta esfera sería un litigio acerca de las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo General y no de las obligaciones resultantes de otros acuerdos internacionales. Sin embargo, dado que el Acuerdo General no imponía obligaciones de limitar el comercio sino que únicamente permitía las restricciones en virtud del artículo XX, se preguntó cómo era posible que el hecho de no limitar el comercio de los productos en cuestión diera lugar a una diferencia en el marco del Acuerdo General. La delegación de Nigeria explicó que se incluían esas disposiciones relativas a la solución de diferencias porque a su juicio la parte infractora en una controversia debía estar obligada a pagar los perjuicios. Se recogía el concepto de medidas provisionales porque los productos en cuestión eran peligrosos y si las medidas para prohibir el comercio de esos productos peligrosos se retrasaban hasta que se resolviera la diferencia, podían surgir graves riesgos para la salud y el medio ambiente."³⁸

5. En la séptima reunión, con respecto a la obligación contenida en el proyecto de Decisión de que toda parte contratante que prohíba o restrinja rigurosamente un producto deberá examinar si la exportación de ese producto debe estar sujeta a medidas equivalentes (artículo 3.1. del documento L/6872):

"[Una] delegación puso en tela de juicio el derecho de un país a incluir un aspecto extraterritorial en su legislación nacional, como implicaba el párrafo 1 del artículo 3 [de la Decisión]. Otra delegación declaró que la interdependencia era una realidad mundial y que el párrafo 1 representaba un principio fundamental de la responsabilidad global que debían aceptar naciones. Añadió que la rentabilidad no podía ser el único motivo que regulase el comercio sino que también debía tomarse en consideración la necesidad de proteger la salud a nivel mundial y de preservar el medio ambiente, especialmente en los países que no tenían los medios suficientes para hacer frente de manera adecuada a dichas preocupaciones en relación con sus importaciones. La misma delegación sugirió también que se utilizase un lenguaje más firme en el párrafo 2 para subrayar lo que, a su parecer, debía ser un objetivo común: el control y la supervisión del comercio de estos productos. Otra delegación indicó que, como obligación basada en el máximo empeño, el artículo 3 no planteaba ningún problema. Añadió que, dado que la legislación podía variar mucho de un país a otro dejando un gran margen para la discriminación, la segunda frase del párrafo 1, que trataba de la no discriminación, era importante."³⁹

6. También en esa reunión, con respecto a la solución de diferencias:

"...una delegación hizo hincapié en que el mecanismo de solución de diferencias del GATT no podía utilizarse para decidir si se habían respetado las obligaciones dimanantes de otros acuerdos internacionales, y que no se podía hacer cumplir otras obligaciones internacionales

³⁸*Id.*

³⁹Spec(90)35, página 2.

por conducto del GATT. Dos delegaciones observaron la necesidad de seguir los debates llevados a cabo en el Grupo de Negociación de la Ronda Uruguay sobre la Solución de Diferencias. Otra delegación consideró que debían incluirse el concepto de medidas tradicionales adoptadas durante el procedimiento de solución de diferencias y el concepto de compensación por daños y perjuicios."⁴⁰

7. En la octava reunión se examinaron el artículo 3 y las disposiciones de solución de diferencias:

"Dos delegaciones expresaron su preocupación por el hecho de que las disposiciones del artículo 3.1 pudieran tener consecuencias trascendentales para el sistema de normas del GATT. Una de estas delegaciones propuso un texto que sustituiría la parte de este artículo en que se instaba a las delegaciones a considerar las condiciones reinantes fuera del territorio de sus propios países, con la idea de especificar las situaciones en que se advirtiera un riesgo grave o un peligro grave para la vida y la salud de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales. Sugirió que este nuevo texto fuera acompañado de un párrafo en el Preámbulo, en el que se expusiera de manera más general la noción de responsabilidad extraterritorial compartida. En cambio, otra delegación consideraba que el hecho de especificar situaciones crearía limitaciones inadecuadas, por cuanto, con frecuencia, los peligros para el medio ambiente se ponían de manifiesto lentamente, y no siempre eran directos ni fáciles de determinar. Una delegación hizo notar que en el artículo 3.1 no se explicaba de qué manera un país tomaría en cuenta la necesidad de prestar la máxima atención posible a la protección de la vida y la salud de las personas y de los animales y la preservación de los vegetales en el territorio de los demás países. A su juicio, faltaba el proceso de consultas entre el exportador y el importador, proceso que aportaría un elemento de responsabilidad compartida para impedir el comercio de productos peligrosos. Esta delegación consideraba que sería más adecuado crear mecanismos similares al procedimiento del consentimiento fundamentado previo, que permitiría a los países importadores hacer constar y difundir oficialmente sus decisiones en cuanto a la importación y utilización de productos que hubieran sido prohibidos o rigurosamente restringidos en otros países. Sin embargo, otras dos delegaciones destacaron la importancia de este artículo 3.1, por considerar que enunciaba uno de los conceptos clave de la Decisión. Una de estas delegaciones hizo notar que este artículo no tenía por objeto instar a los exportadores a que intervinieran en los asuntos internos de otros países, sino garantizar que se asumiera cierta responsabilidad respecto de productos que se hubieran considerado peligrosos y cuya utilización pudiera tener consecuencias para esos otros países. La otra delegación hizo hincapié en que este artículo debía contener tres elementos básicos: la adopción de normas y reglamentos internos para prohibir o restringir ciertos productos en el país exportador; la consideración de una posible prohibición o restricción de la exportación de estos productos; y el examen de los efectos de estos productos en terceros países. Sugirió que se revisara el texto del artículo 3.1 para incorporar estas ideas y para lograr que las partes contratantes se comprometieran a fortalecer la cooperación a este respecto."⁴¹

"Varias delegaciones expresaron su preocupación por la posibilidad de que se estableciera un vínculo entre las disposiciones de solución de diferencias de esta Decisión, que figuraban en el artículo 9, y las disposiciones de los demás instrumentos internacionales enumerados en el anexo II. Convinieron en que las disposiciones de solución de diferencias del Acuerdo General no podían utilizarse para obligar a las partes contratantes del GATT a cumplir sus obligaciones dimanantes de los demás instrumentos internacionales enumerados en el anexo II. Una de estas delegaciones cuestionó la necesidad de incluir ese artículo, por cuanto esta Decisión, una vez

⁴⁰*Id.* página 3.

⁴¹Spec(90)39, página 2.

adoptada, formaría parte del Acuerdo General y, por consiguiente, estaría sujeta a sus disposiciones de solución de diferencias. Otra de estas delegaciones sugirió que el problema podía resolverse limitando las disposiciones de solución de diferencias a los aspectos relacionados con el comercio a los que se refería esta Decisión. Añadió que, en la actualidad, y en la medida en que esos otros instrumentos contenían disposiciones relacionadas con el comercio, podían verse afectados por los procedimientos de solución de diferencias del GATT. Sin embargo, otra delegación no estaba de acuerdo en que este artículo debía limitarse a cuestiones relacionadas con el comercio, por cuanto sería imposible e ilógico dividir esta Decisión en lo que estaba relacionado con el comercio y lo que no lo estaba. Planteó la cuestión de quién decidiría qué estaba relacionado con el comercio y qué no lo estaba. Dos delegaciones expresaron el deseo de que se incluyeran disposiciones sobre compensación por daños y sobre medidas provisionales en el caso de envíos no autorizados de productos peligrosos. Se hizo notar que el concepto del arbitraje, incluido en la Decisión de 12 de abril de 1989 sobre mejoras de las normas y procedimientos de solución de diferencias del GATT, podía ser una alternativa a este respecto. No obstante, una delegación consideraba que sería difícil incorporar una disposición sobre compensación financiera, porque ello equivaldría a un acuerdo entre los gobiernos y, salvo en el caso de las empresas de comercio de Estado, los gobiernos no eran directamente responsables de las acciones de las empresas privadas."⁴²

8. En la novena reunión, las deliberaciones se centraron en la redacción del texto:

"...Una delegación sugirió también que se incluyera en la Decisión la idea de que podían revocarse posteriormente las prohibiciones de exportación en caso de que una de las partes contratantes indicara que deseaba importar el producto. Varias delegaciones pidieron además que en la cuarta variante se mantuviera la frase "reconociendo a cada uno de los países exportadores la facultad de decidir si permite o no la importación y uso de los productos afectados en sus circunstancias concretas", pero no estaban seguras de dónde debía colocarse. No obstante, dos delegaciones la estimaban innecesaria porque debilitaba el artículo..."⁴³

9. En la décima reunión, se examinó la relación existente entre el Acuerdo General y otros instrumentos internacionales:

"Todas las delegaciones estuvieron de acuerdo en que la Decisión no debía constituir una duplicación de la labor de otros instrumentos internacionales pertinentes, aunque un ámbito de aplicación amplio, que abarcara todos los productos prohibidos o rigurosamente restringidos por ser peligrosos o nocivos, era indispensable a los efectos de esa labor. Les preocupaba particularmente que la propuesta no incluyera los productos de consumo ni los alimenticios. Una delegación señaló que como las obligaciones estipuladas en el texto actual no eran muy estrictas, una definición abierta del ámbito de aplicación sería perfectamente aceptable, sobre todo teniendo en cuenta que, en última instancia, los gobiernos nacionales decidirían lo que se prohibiría o lo que estaría rigurosamente restringido. El observador del PNUMA explicó los últimos cambios en relación con la definición de productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos... [Una delegación] no podía aceptar que el procedimiento del consentimiento fundamentado previo se considerara equivalente a una prohibición o una

⁴²*Id.* página 4.

⁴³Spec(91)3, página 2.

restricción rigurosa de índole interna. Otra delegación convino en que el procedimiento de consentimiento fundamentado previo se podía considerar equivalente, pero sólo respecto de aquellas categorías de productos a las que se aplicara un sistema establecido a nivel internacional."⁴⁴

La declaración del representante del PNUMA figura en el anexo II a la presente nota ya que ejemplifica el tipo de cuestiones técnicas que se plantearon en las deliberaciones relativas a la cobertura y las definiciones.

⁴⁴Spec(91)60, página 2.

ANEXO II

Declaración formulada por el Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la reunión del Grupo de Trabajo de la Exportación de Mercancías cuya Venta está Prohibida en el País de Origen celebrada el 16 de mayo de 1991

Gracias señor Presidente. Quisiera hacer una breve observación referente a algunas de las declaraciones que han formulado, en primer lugar, la distinguida delegación de los Estados Unidos, y luego algunas otras delegaciones, con respecto a la cobertura de los productos de consumo por las Directrices de Londres, por ejemplo. Cuando se adoptaron esas Directrices, nosotros, como Secretaría, junto con la FAO, tuvimos que comenzar a interpretar la manera en que los gobiernos informaban a nuestras organizaciones sobre las medidas de control para prohibir todos los usos (esto es, prohibición general) o para prohibir la mayoría de los usos (es decir, restricción rigurosa) de los productos comprendidos en el Código de Conducta y las Directrices de Londres, particularmente en estas últimas. Analizando una gran cantidad de esas notificaciones tal como se nos habían comunicado a lo largo de por lo menos cinco años, tuvimos mucha dificultad en entender a qué categoría de uso o a qué tipo determinado de usos se referían los gobiernos cuando informaban sobre medidas normativas que correspondían ampliamente a esa categoría. En consecuencia, hicimos un análisis comparativo de muchas de esas notificaciones o medidas de control y lo sometimos a un grupo mixto de expertos FAO/PNUMA, grupo que hemos establecido para que asesore a las dos secretarías sobre la interpretación de las definiciones y las notificaciones de medidas de control recibidas. Se nos recomendó considerar la posibilidad, y proponerla a los gobiernos, de que las notificaciones de medidas de control indicaran claramente a qué categoría general de uso el gobierno aplicaba una prohibición o una restricción rigurosa; las categorías generales de uso que se nos aconsejó fueron: productos químicos agrícolas, incluidos los plaguicidas para todos los tipos de uso, productos químicos industriales y productos químicos de consumo.

El grupo de expertos recomendó que, en caso de que se prohibiera la utilización de un producto químico en una de esas categorías generales de uso, se aplicaría la definición de prohibición. Esto significa que respecto de ciertos productos químicos que pueden clasificarse en más de una de estas categorías de usos generales (y ello ocurre con frecuencia), aun cuando la prohibición afecte a sólo una de las categorías de uso, se deberá seguir observando la prohibición y se aplicará el procedimiento del consentimiento fundamentado previo. Hay bastantes productos químicos que se utilizan como plaguicidas, por ejemplo, y que también se emplean como productos químicos industriales. También hay productos químicos industriales que con frecuencia son componentes de productos químicos de consumo. La única salida que el grupo de expertos nos propuso para poder interpretar claramente las prohibiciones y las restricciones rigurosas notificadas consistió en recomendar a los gobiernos que al notificar, con arreglo a las Directrices de Londres, las prohibiciones de todos los usos o las prohibiciones de la mayoría de los usos, es decir, las prohibiciones y las restricciones rigurosas, indicaran claramente si la medida afectaba a una sola categoría de uso -productos químicos agrícolas, industriales o de consumo- o si afectaba a más de una categoría de uso. No obstante, una sola categoría de uso sería suficiente. Hay actualmente cierto número de estas prohibiciones o restricciones rigurosas en nuestra base de datos que han sido notificadas por los gobiernos en las que, por ejemplo, los productos químicos están prohibidos en los productos de consumo. El uso del plomo en la pintura de los juguetes infantiles es un ejemplo, aunque hay más.

En fecha reciente presentamos esta recomendación del grupo mixto de expertos FAO/PNUMA a un Grupo de Trabajo de expertos gubernamentales, al que el Consejo de Administración del PNUMA ha encomendado informar sobre la aplicación de las Directrices de Londres y las dificultades encontradas por los gobiernos en esa aplicación; y ese grupo especial de expertos gubernamentales aceptó la recomendación que le presentamos. Tenemos la intención de remitirla muy pronto a todas las autoridades nacionales designadas a que se refieren las Directrices de Londres. Casi 100 países ya han expresado su deseo de participar en un manual de aplicación, en el que pediremos a los gobiernos que indiquen claramente, al notificar los productos químicos con arreglo a las Directrices de Londres, si la prohibición o restricción rigurosa se aplica a una, a dos, o a las tres categorías de uso, aunque con una sola categoría baste. Señor Presidente, creo que esta es una información importante que las delegaciones deberían considerar. Gracias.⁴⁵

⁴⁵Spec(91)60, página 4.